



Dictadura y agua en el DF

El mismo gobierno que celebra sin bochorno 50 años de dictadura castrista sobre el Paseo de la Reforma (ver rejas de Chapultepec), se dispone a privatizar el agua. No hay nada inherentemente malo en la gestión privada del agua. Al contrario. Desde luego, sí en la dictadura, especialmente en la que asola la desventurada isla desde hace medio siglo.

La izquierda mexicana (o su expresión en la ciudad de México) rompe, por un lado, con su arcaico catecismo, al menos en el capítulo que condena la participación privada en los servicios públicos y recursos naturales (electricidad, agua, petróleo). Por el otro, es triste que venere aún con fascinación hipnótica a la dictadura totalitaria más antigua del planeta, sólo opacada por la Dinastía Kim en Corea del Norte. Cuando rompa también con ella tendrá vuelos mayores.

Por lo pronto, hay que aplaudir no a la dictadura cubana, sino a la decisión inteligente de Marcelo Ebrard de construir un nuevo esquema de alianza entre el gobierno de la ciudad y la iniciativa privada para responder a uno de los más grandes desafíos de la metrópolis: una gestión del agua sostenible a largo plazo, de calidad y cobertura universal.

A esta iniciativa subyace el desfonde del viejo sistema burocrático. Escasez endémica en el oriente de la ciudad, mala calidad del servicio, falta de

tratamiento, sobreexplotación de acuíferos y hundimiento del suelo, bajísima eficiencia física y administrativa, y fugas obscenas, se suman ahora a una inmediata perspectiva de crisis.

Las presas del Cutzamala almacenan a esta fecha menos de 60% de los volúmenes históricos, mientras se acumula en ellas un déficit creciente de casi 90 millones de metros cúbicos. Lo peor es que los caudales transportados hacia la ciudad de México, a un costo energético elevadísimo, se pierden casi 40% en la red de distribución debido a su obsolescencia por falta de inversión.

El esquema que planea el GDF implica sectorizar regionalmente la red hidráulica del Distrito Federal y transferir su operación a empresas privadas especializadas a través de un contrato o concesión a largo plazo. La idea es que el GDF entregue en cada sector un cierto volumen de agua en bloque a las empresas. Estas buscarán maximizar su rentabilidad, invertirán masivamente en la rehabilitación de la red, actualizarán e instalarán sistemas de medición, facturarán y cobrarán por cada metro cúbico de agua. Al pagarla, nosotros la ahorraremos.

En el negocio privado estará la virtud pública. El GDF actuará como entidad reguladora. Es una audaz ruptura doctrinaria. ¿Veremos a la izquierda algún día dar la espalda a la dictadura castrista? ■

